



EL RELOJ DEL CONFLICTO 5D by Osmov Assisted Artificial Intelligence (AAI)

Versión 1.0



ESTRATEGIA / SEGURIDAD HEMISFÉRICA

General Oswaldo Moreno
ABOGADO



Sábado, 15 de noviembre de 2025 / 23:00

VENEZUELA EN EL RELOJ DEL CONFLICTO Y LA DINÁMICA DEL PODER NACIONAL

—Rescatar la democracia y reconstruir el poder ciudadano—

QUITO — Venezuela se ha convertido en el principal punto de tensión del sistema interamericano. Lo que ocurra allí en los próximos meses no solo definirá el futuro de un país agotado por el autoritarismo, la crisis económica y la migración masiva, sino también la credibilidad real de la seguridad hemisférica.

Del diagnóstico al escenario objetivo

Este documento aplica el Reloj del Conflicto 5D by Osmov al caso venezolano y expone técnicamente las lecturas políticas, diplomáticas y militares que de él se derivan. El objetivo es ofrecer a presidentes, cancilleres, parlamentos y mandos militares un “escenario objetivo” (ideal o deseado): un conjunto de opciones para rescatar la democracia y reconstruir el poder ciudadano sin precipitar al hemisferio a una guerra abierta.

Cuando se publicó la primera parte de este artículo —“La victoria silenciosa: ganar en Venezuela sin disparar un solo cartucho”— el tablero hemisférico ya mostraba signos preocupantes. Hoy, ese tablero ha entrado en una fase de inestabilidad mayor: despliegues militares, declaraciones cruzadas, amenazas veladas y operaciones en el Caribe han elevado la temperatura estratégica a niveles que hace pocos años habrían parecido impensables.

El anuncio de la Operación “Lanza del Sur” por parte de Estados Unidos, con presencia naval reforzada en el Caribe, y la respuesta inmediata del régimen venezolano, proclamando la movilización de 200.000 hombres y mujeres en uniforme, son dos señales claras de que el conflicto ha entrado en una fase distinta.

Aunque el impacto militar efectivo de ese despliegue es discutible —tanto por las limitaciones reales de las fuerzas venezolanas

como por las restricciones políticas y operativas que condicionan el uso de la fuerza estadounidense—, el mensaje político es inequívoco: ambas partes aceptan que el escenario ya no es solo diplomático o económico, sino también militarmente sensible. El Reloj del Conflicto by Osmov registra esos movimientos como un cambio de cuadrante: el tiempo para la prevención se acorta y la ventana para una salida inteligente se vuelve más estrecha, pero todavía existe.

Desde la óptica de la seguridad hemisférica, el sistema interamericano se aproxima a un punto crítico donde ya no se discute únicamente sobre sanciones, mediaciones o diálogo político, sino sobre la posibilidad real de que un error de cálculo empuje al hemisferio hacia un conflicto abierto, con consecuencias difíciles de contener.

El escenario objetivo deseado para Venezuela no pretende describir todos los caminos posibles, sino proponer una ruta política, diplomática y estratégica que permita: evitar una guerra mal concebida; impedir que se consolide una “paz autoritaria” indefinida; y abrir espacio a un cambio político ordenado, basado en la legitimidad democrática ya obtenida y en una respuesta hemisférica más coherente.

En este contexto, instrumentos como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Junta Interamericana de Defensa (JID) y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) vuelven inevitablemente al centro del debate. No para repetir fórmulas del siglo XX, sino para preguntarse si el sistema interamericano está dispuesto a desempeñar un papel real en la gestión de una crisis que hoy trasciende con mucho las fronteras de Venezuela.

Un presidente electo sin poder efectivo

La particularidad del caso venezolano en 2024–2025 es que la discusión ya no gira alrededor de la necesidad de nuevas elecciones, sino de qué hacer con los resultados de una elección cuya legitimidad es disputada. Diversos informes independientes y centros de observación han señalado que la elección presidencial de julio de 2024 estuvo marcada por irregularidades graves y una opacidad tal, que el resultado proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en favor de Nicolás Maduro es considerado por muchos gobiernos y analistas como un fraude de gran escala.

Sin embargo, al mismo tiempo, una parte significativa de la comunidad internacional y de la sociedad venezolana reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo legítimo. Estados Unidos y otros países han manifestado públicamente que lo consideran el verdadero vencedor de la contienda, mientras que la Unión Europea y varios gobiernos latinoamericanos han puesto en duda, con distintos matices, la versión oficial del CNE.

A esta disputa de legitimidades se suma la figura de María Corina Machado, inhabilitada para competir directamente, pero convertida en símbolo de la resistencia democrática, hoy premiada con el Nobel de la Paz 2025 y con el Premio Sájarov 2024, reconocimiento que refuerza la narrativa internacional de que existió una victoria democrática bloqueada, no una derrota clara de la oposición.

Desde la perspectiva del Reloj del Conflicto 5D by Osmov, esto coloca a Venezuela en una situación excepcional: ya hay un ganador reconocido por una parte relevante del hemisferio, pero ese ganador no controla ni el aparato del Estado ni el territorio. El problema estratégico ya no es “quién ganó”, sino cómo puede materializarse una transferencia real de poder en un entorno donde las instituciones han sido capturadas y las fuerzas armadas responden, en apariencia, al statu quo.

Cambios de poder no convencionales: lecciones regionales

La historia latinoamericana ofrece ejemplos en los que el relevo de poder no se produjo mediante la ceremonia ordenada en el palacio de gobierno, sino en escenarios de crisis, con fuerzas armadas, parlamentos y actores

sociales buscando a contrarreloj una salida que evitara el caos.

En uno de esos episodios, a inicios de este siglo (21 de enero de 2000), la combinación de colapso económico, protesta social y fractura política en el Ecuador derivó en la caída abrupta del presidente en funciones, Jamil Mahuad. Durante horas, el país osciló entre la posibilidad de un gobierno de facto y otras fórmulas igualmente problemáticas. La solución que terminó imponiéndose fue la entrega del poder al vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano, con el objetivo de mantener el orden y la paz social.

Ese acto se realizó fuera del Palacio de Carondelet, con la presencia visible de mandos militares que se presentaron como garantes del orden constituido, no como nuevos detentores del poder. La fórmula fue imperfecta y objeto de debate jurídico; sin embargo, permitió reencauzar la crisis hacia una continuidad institucional mínima, evitando tanto un vacío prolongado de poder como la consolidación de un nuevo autoritarismo armado.

La lección central no es replicar mecánicamente aquel caso, sino admitir que, en contextos de captura institucional y polarización extrema, la materialización de la legitimidad democrática puede requerir soluciones no convencionales, siempre que se preserve una base jurídica reconocible, un principio de continuidad constitucional y la subordinación final de las fuerzas armadas al poder civil.

ESCENARIO OBJETIVO: HACER EFECTIVA LA VICTORIA DEMOCRÁTICA

Llevando esta reflexión al caso venezolano, el escenario objetivo no consiste en pedir nuevas elecciones inmediatas, sino en operacionalizar la victoria ya obtenida por la opción democrática. Es decir, cómo pasar de un presidente electo sin poder efectivo a un presidente en funciones, minimizando el riesgo de guerra civil o de una intervención desordenada.

En el contexto actual, el dato central es sencillo pero decisivo: ya existe un presidente elegido por la mayoría, Edmundo González Urrutia, cuyo mandato ha sido bloqueado por el aparato de poder. El problema estratégico ya no es de conteo de votos, sino de transferencia real de autoridad.

En un entorno donde las instituciones formales —CNE, Tribunal Supremo, Asamblea oficialista, alto mando militar— están alineadas con el régimen, los caminos clásicos de reconocimiento y posesión se encuentran cerrados. El desafío para el hemisferio, visto desde el Reloj del Conflicto 5D by Osmov, es converger en una salida que permita que ese mandato se ejerza efectivamente. Entre las rutas posibles se pueden considerar, al menos, dos opciones:

- **Un acto de asunción reconocido internacionalmente**, aunque no ocurra en el Palacio de Miraflores, sino en un espacio alternativo: una sede legislativa legítima, una instalación militar que se declare garante del orden constitucional o incluso una embajada bajo protección internacional. A partir de ese momento, Edmundo González Urrutia debe ser tratado y respaldado como presidente en funciones, con todos los efectos políticos y diplomáticos que ello implica.
- **Un acuerdo político-institucional**, en el que un sector relevante de las fuerzas armadas y de las élites civiles acepte que la continuidad del régimen es insostenible y avale la transferencia de mando hacia el presidente electo, con compromisos explícitos para evitar persecuciones indiscriminadas y con garantías razonables para quienes rompan con el statu quo, siempre dentro del marco de la justicia nacional e internacional.

En todos los casos, el punto de partida no es la búsqueda de una nueva figura, sino el reconocimiento práctico del presidente que ya fue elegido por los venezolanos. Cualquier mecanismo jurídico, político o diplomático debe entenderse únicamente como una vía para hacer efectivo su mandato, no para relativizarlo ni sustituirlo. Solo así el cambio democrático podrá ser percibido, dentro y fuera de Venezuela, como una corrección democrática de la deriva autoritaria y no como un simple reajuste de élites.

Sin este ambiente sociopolítico, cualquier intento de “posesión simbólica” corre el riesgo de convertirse en un gesto testimonial sin capacidad de modificar la correlación de fuerzas en el terreno.

A continuación, se analizarán seis expresiones del Poder Nacional —psicosocial, política, económica, militar, tecnológica y ambiental— aplicadas al caso venezolano.

¿QUÉ OCURRE CON LOS MILICIANOS Y LA BASE DURA?

Durante años, el proyecto bolivariano ha construido identidades políticas y militares: milicias, colectivos armados, estructuras barriales de control social y un relato según el cual ser “defensor de la revolución” equivale a proteger la patria frente a enemigos internos y externos.

Un cambio político en Venezuela no será solo un recambio de élites; implicará la reubicación psicológica y material de decenas de miles de personas cuya autoestima, sustento y sentido de pertenencia están ligados a su lealtad al régimen.

El escenario objetivo debería incluir:

- **Un mensaje de inclusión sin impunidad**, dejando claro que la responsabilidad penal es individual, que no todo quien formó parte de una milicia es enemigo, y que existe un lugar para quienes quieran reincorporarse a la vida civil o a instituciones reformadas, siempre que se distancien de la violencia y del delito.
- **Rutas de reconversión y desarme**, con programas de formación técnica, empleo en sectores productivos o servicios públicos no armados, y participación en tareas de protección civil y reconstrucción comunitaria.
- **Una diferenciación nítida** entre el núcleo involucrado en violaciones graves de derechos humanos, corrupción o crimen organizado —que deberá responder ante la justicia— y la masa de seguidores recuperables.
- **Mecanismos de reconciliación nacional y mediación comunitaria**, especialmente en barrios donde las milicias han tenido presencia fuerte, para prevenir retaliaciones y reconstruir mínimos de convivencia.

No se trata de premiar la lealtad al régimen, sino de evitar que un sector social numeroso quede sin horizonte y se convierta en un terreno fértil para futuros ciclos de violencia.

LA NEGOCIACIÓN INDIRECTA Y DECISIÓN POLÍTICA HEMISFÉRICA

La combinación de crisis política interna, tensiones militares y deterioro económico ha dejado obsoleta la comodidad de una seguridad cooperativa puramente declarativa.

El hemisferio se enfrenta a una decisión de fondo:

¿Se limitará a observar cómo se consolida una paz autoritaria en Venezuela, o asumirá el costo político de impulsar una seguridad colectiva democrática, capaz de proteger a la vez la paz, la legalidad y la voluntad popular ya expresada?

En este contexto, la negociación será, inevitablemente, indirecta: a través de terceros confiables, canales discretos y presiones escalonadas, más que por una mesa única y pública. El escenario deseado descansa en las siguientes ideas fuerza:

1. **Reconocer la victoria democrática ya existente**, en lugar de enredar la discusión en ciclos interminables de nuevas elecciones dentro de un sistema capturado.
2. **Asegurar, por vías políticas, jurídicas y diplomáticas**, que el presidente electo asuma efectivamente el mando y ejerza sus funciones, sin fórmulas intermedias que lo sustituyan o relativicen su legitimidad.
3. **Acompañar el cambio político con un programa económico serio y verificable**, que convierta la esperanza en resultados tangibles y haga inviable el retorno al modelo anterior.
4. **Anclar todo el proceso en una arquitectura de seguridad colectiva democrática**, donde la OEA, la JID, el TIAR y otros mecanismos subregionales actúen como garantes de las reglas, no como espectadores de la crisis.

“La victoria silenciosa” no consiste en estabilizar por cansancio un orden injusto, ni en convertir a Venezuela en un campo de batalla simbólico entre potencias. Consiste en lograr que el precio de sostener la presidencia de facto se vuelva inasumible y que la única salida racional —para todos los actores relevantes— sea abrir paso a la autoridad legítima, bajo un marco de garantías razonables y con la mirada puesta en una paz que no renuncie a la democracia.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA INTEGRAL

La experiencia histórica muestra que, tras conflictos o colapsos profundos, las transiciones más estables han combinado cambio político con programas económicos robustos. Venezuela no será la excepción.

Sin un horizonte económico creíble, cualquier esfuerzo político corre el riesgo de

desmoronarse. La población que ha soportado años de hiperinflación, deterioro salarial, colapso de servicios básicos y migración masiva no se sostendrá solo con símbolos o promesas. Por eso, el escenario objetivo exige un programa de recuperación integral, respaldado por una coalición amplia de actores internacionales y regionales, con al menos tres pilares:

1. Un fondo de estabilización y reconstrucción, orientado a:
 - Recuperar gradualmente la estabilidad de precios y el funcionamiento básico del sistema financiero;
 - Rehabilitar infraestructura crítica (electricidad, agua, transporte, salud, educación);
 - Sostener redes mínimas de protección social mientras la economía comienza a reactivarse.
2. El aprovechamiento estratégico del talento venezolano dentro y fuera del país, mediante:
 - Incentivos claros y graduales para el retorno de quienes deseen volver;
 - Mecanismos que faciliten la inversión productiva de la diáspora y canalicen remesas hacia proyectos de desarrollo local;
 - Programas de intercambio y transferencia de conocimiento que integren a profesionales venezolanos en el exterior con universidades, empresas y agencias públicas en proceso de reconstrucción.
3. Una alianza económica condicionada a resultados democráticos, en la que:
 - La cooperación financiera y técnica se entienda como una asociación estratégica, no como un cheque en blanco;
 - Los desembolsos y apoyos se vinculen a avances verificables en libertades fundamentales, fortalecimiento institucional, transparencia y lucha contra la corrupción;
 - Se reduzca de manera sostenida el peso de las economías ilícitas asociadas al modelo anterior (narcotráfico, contrabando, redes ilegales de extracción de recursos).

El mensaje de fondo es simple: la victoria democrática tiene que traducirse en mejoras concretas de vida para la población. Sin este componente económico, el nuevo ciclo político corre el riesgo de convertirse en un breve paréntesis entre dos crisis, alimentando la frustración y abriendo la puerta a nuevas formas de autoritarismo, con otro discurso, pero con las mismas lógicas de captura del Estado.

REFORMA MILITAR, LÍMITE Y ESCALADA MÁXIMA

La actual Fuerza Armada Nacional ha sido columna vertebral del proyecto en el poder: fusionó la defensa externa, el control interno, la participación económica y la lealtad política. La reforma del sector defensa será, por tanto, un componente decisivo de cualquier escenario de cambio político y salida de la crisis.

Algunas líneas estratégicas mínimas serían:

- **Despolitizar el uniforme**, prohibiendo efectivamente el proselitismo partidista en cuarteles y orientando la educación militar hacia la defensa nacional, la Constitución, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
- **Reestructurar mandos y unidades**, ajustando el tamaño y funciones de la estructura militar a las necesidades reales de la seguridad y defensa, desactivando unidades creadas para tareas ajenas a su misión y devolviendo a policías reformadas, bajo control civil, la responsabilidad principal del orden público.
- **Investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos y casos significativos de corrupción**, protegiendo y profesionalizando al personal que no haya cometido delitos, y ofreciéndole una carrera en un marco democrático.
- **Construir una nueva relación con la sociedad**, basada en la transparencia en presupuesto y adquisiciones, y en un rol visible en ayuda en desastres, infraestructura y misiones científicas, que fortalezca la confianza ciudadana.

El escenario objetivo solo será sostenible si se logra que las fuerzas armadas se reconozcan como institución de la República, no como guardia pretoriana de un proyecto político.

Ahora bien, ningún análisis responsable puede ignorar la hipótesis más incómoda:

¿Qué pasa si la presión política, diplomática y económica fracasa, y el poder de facto opta por atrincherarse, incrementando la represión y elevando el riesgo de desbordamiento regional?

En ese punto, el sistema interamericano se aproximaría al borde de una guerra abierta. Si la opción del uso de la fuerza llegara a entrar en discusión, debería hacerlo bajo condiciones muy estrictas: agotamiento demostrable de todas las vías pacíficas; base jurídica y política clara, con amplio consenso hemisférico; objetivos limitados en el tiempo y el alcance; reglas de enfrentamiento diseñadas para minimizar el daño a la población civil; y un plan de salida definido desde el primer día.

Entre las hipótesis límite, una de las más sensibles es la posibilidad de ataques de alto impacto simbólico contra activos estratégicos de Estados Unidos o contra infraestructuras críticas mediante medios aéreos o no tripulados. Desde la lógica de sectores radicales, un golpe exitoso o parcialmente exitoso contra un objetivo de alto valor podría verse como triunfo psicológico, aunque el costo militar posterior fuera devastador.

Por ello, el escenario objetivo debe contemplar tres líneas de acción simultáneas:

1. **Refuerzo de la disuasión**, con comunicaciones claras y firmes sobre las consecuencias de cualquier ataque de ese tipo.
2. **Preparación responsable de la población en zonas sensibles**, explicando de forma serena y técnica los protocolos de protección civil.
3. **Mantenimiento de canales discretos de desescalada** que ofrezcan alternativas menos catastróficas a quienes podrían verse tentados a cruzar esa línea.

La misión no es alimentar el miedo, sino **evitar que un cálculo suicida convierta una crisis grave en una tragedia hemisférica.**

GUERRA TECNOLÓGICA: CIBERATAQUES, DRONES Y PREVENCIÓN HEMISFÉRICA

La guerra en Ucrania ha demostrado que, en los conflictos contemporáneos, la dimensión tecnológica puede alterar en semanas el balance de poder. Ataques cibernéticos coordinados contra infraestructuras críticas, campañas masivas de desinformación y empleo de enjambres de drones —de

reconocimiento, ataque y merodeo— se han convertido en parte central del campo de batalla.

En un eventual escenario de crisis en el Caribe, Venezuela y sus aliados extrahemisféricos podrían verse tentados a reproducir patrones similares: ciberataques contra redes eléctricas, sistemas bancarios, telecomunicaciones y plataformas gubernamentales de países vecinos y de Estados Unidos; uso de drones comerciales adaptados o sistemas no tripulados de mayor alcance para hostigar bases militares, puertos, aeropuertos, refinerías o nodos logísticos; y operaciones informacionales dirigidas a sembrar confusión, dividir a las sociedades democráticas y erosionar la confianza en sus instituciones.

El escenario deseado debería asumir que la **primera línea de choque puede ser invisible y silenciosa**, y que la respuesta hemisférica tiene que adelantarse a la crisis. Algunas líneas estratégicas mínimas serían:

- **Blindaje cibernético conjunto**, mediante la creación o fortalecimiento de centros regionales de respuesta a incidentes, protocolos compartidos de alerta temprana y ejercicios periódicos de ciberdefensa colectiva sobre infraestructuras críticas.
- **Defensa antidrone en capas**, con despliegue escalonado de sensores, inhibidores, medios cinéticos y capacidades de guerra electrónica para proteger nodos estratégicos, priorizando la interoperabilidad entre fuerzas armadas y agencias civiles.
- **Control y trazabilidad de tecnologías sensibles**, con mayor regulación y vigilancia sobre exportación, reexportación y uso dual de componentes que puedan emplearse en sistemas no tripulados o capacidades cibernéticas ofensivas.
- **Alfabetización digital y resiliencia informacional**, mediante programas de educación cívica y capacitación de líderes políticos, medios de comunicación y ciudadanía para identificar campañas de desinformación, la manipulación maliciosa de la IA (deepfakes) y otras operaciones psicológicas hostiles.

En este plano, la **victoria silenciosa** consiste en neutralizar la capacidad de daño tecnológico antes de que se traduzca en víctimas humanas o en caos social, consolidando un espacio hemisférico donde los costos de la guerra cibernética y de drones

sean demasiado altos para quienes pretendan emplearla como herramienta de chantaje estratégico.

ENERGÍA BAJO FUEGO Y POBLACIÓN VULNERABLE

En la escena hemisférica, las infraestructuras energéticas —refinerías, poliductos, plantas termoeléctricas, depósitos de combustibles, plataformas marítimas— son objetivos tentadores para cualquier actor que busque provocar un daño rápido y visible. Pero un ataque contra estas instalaciones no solo paraliza la economía: puede desencadenar desastres ambientales de gran escala con efectos duraderos sobre la salud de la población.

Explosiones en refinerías o tanques de almacenamiento, rupturas de ductos o incendios extensos pueden liberar a la atmósfera nubes tóxicas, generar lluvias ácidas, contaminar ríos, acuíferos y suelos agrícolas, y destruir ecosistemas costeros y marinos. En términos humanos, esto se traduce en crisis respiratorias agudas, aumento de enfermedades crónicas, desplazamientos forzados internos y pérdida de medios de vida para comunidades enteras.

El escenario objetivo debe incorporar explícitamente esta expresión del poder, con al menos cuatro implicaciones:

1. **Umbrales ambientales de uso de la fuerza**, de modo que cualquier discusión sobre operaciones militares —internas, coaligadas o de seguridad colectiva— incluya la obligación de minimizar el riesgo de destrucción masiva del medio ambiente, evitando escenarios de “ecocidio estratégico”.
2. **Preparación para emergencias tecnológicas**, con planes específicos de protección civil para escenarios de contaminación masiva, rutas de evacuación, centros de atención médica especializados y sistemas de monitoreo atmosférico y de aguas.
3. **Mecanismos hemisféricos de respuesta ambiental**, mediante fuerzas de tarea multinacionales para contención de derrames, incendios industriales y desastres asociados a ataques contra infraestructuras energéticas.
4. **Justicia ambiental**, incorporando medidas de reparación ambiental y sanitaria para las comunidades afectadas, reconociendo que la legitimidad del nuevo orden también dependerá de su

capacidad para restaurar territorios y vidas dañadas.

En un mundo donde la energía sigue siendo el pilar fundamental de la economía, convertir las áreas energéticas en blanco militar equivale a poner en la mira a la propia población. La verdadera victoria silenciosa no es solo evitar la guerra abierta, sino impedir que la lógica del conflicto destruya, lenta e irreversiblemente, las condiciones ambientales que hacen posible la vida digna de millones de personas en el hemisferio.

CONCLUSIONES

La forma en que se resuelva la crisis venezolana definirá, en buena medida, el tipo de orden político que el hemisferio está dispuesto a aceptar. Venezuela se ha convertido en un espejo incómodo: o se normaliza la captura del Estado y la manipulación electoral como método de permanencia indefinida en el poder, o se demuestra —con hechos— que la voluntad popular sigue siendo el criterio central de legitimidad en el sistema interamericano.

Desde la lectura del Reloj del Conflicto 5D by Osmov, el escenario objetivo para Venezuela integra seis planos que no pueden tratarse por separado:

1. **El núcleo del problema ya no es “quién ganó las elecciones”, sino cómo se hace efectiva una victoria democrática bloqueada en un entorno institucional capturado.** El escenario objetivo propone reconocer la legitimidad ya existente, asegurar —por vías políticas, jurídicas y diplomáticas— que el presidente electo asuma efectivamente el mando y anclar todo ello en una arquitectura de seguridad colectiva democrática donde la OEA, la JID, el TIAR y los mecanismos subregionales actúen como garantes, no como meros espectadores.
2. **Cualquier cambio político que ignore el destino de milicianos, colectivos y base dura del proyecto en el poder estará sembrando la próxima ola de violencia.** El reto es ofrecer inclusión sin impunidad: rutas de desarme y reconversión para la mayoría, justicia penal o transicional para el núcleo responsable de violaciones graves y mecanismos de reconciliación territorial que eviten retaliaciones y la reapertura de heridas.

3. **Sin un horizonte económico creíble, el nuevo ciclo democrático será frágil.** El escenario ideal requiere un programa de recuperación integral, con un fondo de estabilización y reconstrucción, el aprovechamiento estratégico del talento venezolano dentro y fuera del país y una alianza económica condicionada a resultados democráticos. La esperanza debe convertirse en mejoras tangibles en ingresos, servicios y oportunidades; de lo contrario, el riesgo de regreso al autoritarismo —con otro nombre y otro relato— será permanente.
4. **La Fuerza Armada Nacional no puede seguir funcionando como guardia pretoriana de un proyecto político.** La sostenibilidad del escenario objetivo depende de una reforma profunda del sector defensa: despolitizar el uniforme, ajustar estructura y misiones, separar defensa externa de orden interno y depurar, con justicia y no con venganza, a quienes traicionaron su juramento constitucional. Al mismo tiempo, la región debe mantener visible la hipótesis límite del uso de la fuerza y de una posible escalada máxima, no para precipitarla, sino para entender que la inacción también tiene costos estratégicos y humanos.
5. **La primera línea de un conflicto futuro puede ser cibernética y no cinética. Ciberataques, drones y operaciones informacionales pueden desestabilizar Estados sin disparar un solo cartucho.** La victoria silenciosa, en este plano, consiste en construir un blindaje hemisférico: ciberdefensa cooperativa, defensa antidrone en capas, control de tecnologías sensibles y resiliencia informacional de sociedades y élites políticas.
6. **Atacar infraestructuras energéticas no solo paraliza economías: puede desencadenar desastres ambientales de larga duración, con efectos directos sobre la salud y la supervivencia de comunidades enteras.** El escenario objetivo incorpora umbrales ambientales de uso de la fuerza, preparación para emergencias tecnológicas, mecanismos de respuesta ambiental conjunta y compromisos de justicia ambiental para quienes ya han sido afectados por el colapso del modelo actual.

La victoria silenciosa en Venezuela no consistirá únicamente en evitar una guerra. Consistirá en demostrar que una combinación inteligente de presión política, diplomática, económica, tecnológica y militar —guiada

por la legalidad democrática, la protección de la población y una visión estratégica de largo plazo— todavía puede corregir una deriva autoritaria sin sacrificar a una generación entera en el altar del conflicto.

Si el hemisferio es capaz de acompañar este escenario objetivo con coherencia y decisión, el Reloj del Conflicto 5D by Osmov marcará para Venezuela el paso del cuadrante de Guerra al de reorganización, reconstrucción y reconciliación, no como una tregua frágil, sino como el inicio de una paz digna, democrática y sostenible para su pueblo y para la seguridad hemisférica en su conjunto.

Sobre el autor

[Miguel Oswaldo Moreno Valverde \(Osmov\)](#)

General de Brigada en servicio pasivo del Ejército ecuatoriano, abogado en libre ejercicio profesional, analista estratégico y consultor académico. Ha ocupado funciones de alto nivel en el ámbito militar y en la seguridad del sector energético, con experiencia en planificación estratégica, gestión de crisis y cooperación hemisférica en seguridad y defensa. Actualmente es presidente de la Asociación de Exasesores y Egresados del Colegio Interamericano de Defensa, Capítulo Ecuador (ASOCID-ECUADOR).

Es el creador del modelo de toma de decisiones asistido con inteligencia artificial en cinco dimensiones, denominado “Reloj del Conflicto 5D by Osmov”, cuya implementación se encuentra en fase de pruebas y evaluación.

osmov@asocid-ecuador.com



EL RELOJ DEL CONFLICTO 5D by Osmov Assisted Artificial Intelligence (AAI)

Versión 1.0



VENEZUELA IN THE CONFLICT CLOCK AND THE DYNAMICS OF NATIONAL POWER

—Rescuing democracy and rebuilding citizen power—

STRATEGY / HEMISPHERIC SECURITY

General Oswaldo Moreno
LAWYER



Saturday, 15 November 2025 / 23:00

VENEZUELA IN THE CONFLICT CLOCK AND THE DYNAMICS OF NATIONAL POWER

—Rescuing democracy and rebuilding citizen power—

QUITO — Venezuela has become the main point of tension in the inter-American system. What happens there over the coming months will not only define the future of a country exhausted by authoritarianism, economic collapse, and massive migration, but will also test the real credibility of hemispheric security.

From diagnosis to objective scenario

This document applies the *Reloj del Conflicto 5D* by Osmov (Osmov's 5D Conflict Clock) to the Venezuelan case and sets out the political, diplomatic, and military readings that flow from it. Its aim is to offer presidents, foreign ministers, parliaments, and military leaders an "objective scenario" (ideal or desired): a set of options to rescue democracy and rebuild citizen power without pushing the hemisphere into an open war.

When the first part of this article —"The Silent Victory: Winning in Venezuela Without Firing a Single Round"— was published, the hemispheric chessboard was already showing worrying signs. Today, that board has entered a phase of heightened instability: military deployments, cross-statements, veiled threats, and operations in the Caribbean have raised the strategic temperature to levels that only a few years ago would have seemed unthinkable.

The announcement of Operation "Lanza del Sur" ("Lance of the South") by the United States, with reinforced naval presence in the Caribbean, and the immediate response from the Venezuelan regime, proclaiming the mobilization of 200,000 men and women in uniform, are two clear signs that the conflict has entered a different phase.

Although the actual military impact of this deployment is open to question—both because of the real limitations of Venezuelan

forces and because of the political and operational constraints that condition the use of U.S. force—the political message is unequivocal: both sides accept that the scenario is no longer merely diplomatic or economic, but also militarily sensitive. The *Reloj del Conflicto* by Osmov records these moves as a change of quadrant: the time for prevention is shrinking and the window for an intelligent way out is narrowing — but it still exists.

From the standpoint of hemispheric security, the inter-American system is approaching a critical point at which the debate is no longer only about sanctions, mediation, or political dialogue, but about the real possibility that a miscalculation could push the hemisphere into open conflict, with consequences that would be difficult to contain.

The desired objective scenario for Venezuela does not seek to describe every possible path. Rather, it proposes a political, diplomatic, and strategic route that would: prevent a poorly conceived war; avoid the consolidation of an indefinite "authoritarian peace"; and open space for an orderly political change, based on the democratic legitimacy already obtained and on a more coherent hemispheric response.

In this context, instruments such as the Organization of American States (OAS), the Inter-American Defense Board (IADB), and the Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance (TIAR) inevitably return to the center of the debate. Not to repeat formulas from the 20th century, but to ask whether the inter-American system is willing to play a real role in managing a crisis that now goes far beyond Venezuela's borders.

A president-elect without effective power

What makes the Venezuelan case in 2024–2025 particularly distinctive is that the debate

no longer centers on the need for new elections, but on what to do with the results of an election whose legitimacy is contested. Various independent reports and observation centers have indicated that the July 2024 presidential election was marked by serious irregularities and such opacity that the result proclaimed by the National Electoral Council (CNE) in favor of Nicolás Maduro is considered by many governments and analysts to be a large-scale fraud.

At the same time, however, a significant part of the international community and Venezuelan society recognizes Edmundo González Urrutia as the legitimately elected president. The United States and other countries have publicly stated that they regard him as the true winner of the contest, while the European Union and several Latin American governments have questioned, with varying degrees of emphasis, the official CNE version.

On top of this dispute over legitimacy stands the figure of María Corina Machado, barred from running directly but turned into a symbol of democratic resistance. She has since been awarded the 2025 Nobel Peace Prize and the 2024 Sakharov Prize, recognitions that reinforce the international narrative that there was a blocked democratic victory, not a clear defeat of the opposition.

From the perspective of the *Reloj del Conflicto 5D by Osmov*, this places Venezuela in an exceptional situation: there is already a winner recognized by a relevant part of the hemisphere, but that winner does not control the state apparatus or the territory. The strategic problem is no longer “who won,” but how a real transfer of power can take place in an environment where institutions have been captured and the armed forces appear to respond to the status quo.

Non-conventional transfers of power: regional lessons

Latin American history offers examples where the transfer of power did not occur through an orderly ceremony in the presidential palace, but in crisis scenarios, with armed forces, parliaments, and social actors racing against the clock to find a way out that would avert chaos.

In one such episode, at the beginning of this century (21 January 2000), the combination of economic collapse, social protest, and political fracture in Ecuador led to the abrupt fall of the sitting president, Jamil Mahuad.

For hours, the country oscillated between the possibility of a de facto government and other equally problematic formulas. The solution that ultimately prevailed was the transfer of power to Vice President Gustavo Noboa Bejarano, with the aim of preserving order and social peace.

That act took place outside the Carondelet Palace, with the visible presence of military commanders who presented themselves as guarantors of the constituted order, not as new holders of power. The formula was imperfect and subject to legal debate; however, it allowed the crisis to be channeled back into a minimum institutional continuity, avoiding both a prolonged power vacuum and the consolidation of a new armed authoritarianism.

The key lesson is not to replicate that case mechanically, but to acknowledge that, in contexts of institutional capture and extreme polarization, the materialization of democratic legitimacy may require non-conventional solutions, provided that a recognizable legal basis is preserved, a principle of constitutional continuity is maintained, and the armed forces remain ultimately subordinated to civilian authority.

OBJECTIVE SCENARIO: MAKING THE DEMOCRATIC VICTORY EFFECTIVE

Bringing this reflection to the Venezuelan case, the objective scenario is not about demanding immediate new elections, but about operationalizing the victory already obtained by the democratic option. In other words, how to move from a president-elect without effective power to a sitting president, while minimizing the risk of civil war or a disorderly intervention.

In the current context, the central fact is simple but decisive: there already is a president elected by the majority, Edmundo González Urrutia, whose mandate has been blocked by the ruling apparatus. The strategic problem is no longer about counting votes, but about the real transfer of authority.

In an environment where the formal institutions —CNE, Supreme Court, government-controlled National Assembly, and high military command— are aligned with the regime, the classic paths of recognition and swearing-in are closed. The challenge for the hemisphere, seen through the *Reloj del Conflicto 5D by Osmov*, is to converge on a way out that allows this

mandate to be effectively exercised. Among the possible routes, at least two options can be considered:

- **An act of assumption of office recognized internationally**, even if it does not take place in the Miraflores Palace but in an alternative venue: a legitimate legislative seat, a military installation that declares itself a guarantor of constitutional order, or even an embassy under international protection. From that moment on, Edmundo González Urrutia must be treated and supported as the sitting president, with all the political and diplomatic consequences that implies.
- **A political-institutional agreement**, in which a significant sector of the armed forces and civilian elites accepts that the regime's continuity is unsustainable and endorses the transfer of power to the president-elect, with explicit commitments to prevent indiscriminate persecution and with reasonable guarantees for those who break with the status quo, always within the framework of national and international justice.

In all cases, the starting point is not the search for a new figure, but the practical recognition of the president already chosen by Venezuelans. Any legal, political, or diplomatic mechanism must be understood solely as a way to make his mandate effective, not to relativize or replace it. Only then can democratic change be perceived, inside and outside Venezuela, as a democratic correction of authoritarian drift and not as a simple reshuffling of elites.

Without this sociopolitical environment, any attempt at a “symbolic inauguration” runs the risk of becoming a merely testimonial gesture, unable to alter the balance of power on the ground.

Six expressions of National Power — psychosocial, political, economic, military, technological, and environmental— will now be analyzed as applied to the Venezuelan case.

WHAT ABOUT THE MILITIAS AND THE HARD CORE?

For years, the Bolivarian project has built political and military identities: militias, armed colectivos, neighborhood structures of social control, and a narrative equating “defending the revolution” with protecting

the homeland from internal and external enemies.

Political change in Venezuela will not just be a reshuffling of elites; it will entail the psychological and material relocation of tens of thousands of people whose self-esteem, livelihoods, and sense of belonging are tied to their loyalty to the regime.

The objective scenario should include:

- **A message of inclusion without impunity**, making clear that criminal responsibility is individual, that not everyone who was part of a militia is an enemy, and that there is a place for those willing to reintegrate into civilian life or reformed institutions, provided they distance themselves from violence and crime.
- **Paths for demobilization and reconversion**, with technical training programs, employment in productive sectors or non-armed public services, and participation in civil protection and community reconstruction tasks.
- **A clear distinction between the core involved in serious human rights violations, corruption, or organized crime**—who must answer to justice—and the broader mass of recoverable followers.
- **National reconciliation and community mediation mechanisms**, especially in neighborhoods where militias have had a strong presence, to prevent retaliation and rebuild minimum conditions for coexistence.

This is not about rewarding loyalty to the regime, but about preventing a large social sector from being left without a horizon and becoming fertile ground for future cycles of violence.

INDIRECT NEGOTIATION AND A HEMISPHERIC POLITICAL DECISION

The combination of domestic political crisis, military tensions, and economic deterioration has rendered the comfort of a purely declarative cooperative security obsolete. The hemisphere faces a fundamental decision:

Will it simply watch as an authoritarian peace is consolidated in Venezuela, or will it assume the political cost of promoting a democratic collective security capable of protecting peace, the rule of law, and the popular will already expressed?

In this context, negotiation will inevitably be indirect: through trusted third parties, discreet channels, and graduated pressure, rather than a single, public negotiating table. The desired scenario rests on the following key ideas:

1. **Recognize the already existing democratic victory**, instead of entangling the debate in endless cycles of new elections within a captured system.
2. **Ensure, through political, legal, and diplomatic means**, that the president-elect effectively assumes office and exercises his functions, without interim formulas that replace him or relativize his legitimacy.
3. **Accompany political change** with a serious and verifiable economic program that turns hope into tangible results and makes a return to the previous model unviable.
4. **Anchor the entire process in a democratic collective security architecture**, in which the OAS, the IADB, the TIAR, and other subregional mechanisms act as guarantors of the rules, not as mere spectators of the crisis.

“The silent victory” is not about stabilizing an unjust order out of exhaustion, nor about turning Venezuela into a symbolic battlefield between powers. It is about making the cost of maintaining a de facto presidency unbearable and ensuring that the only rational way out—for all relevant actors—is to open the way for legitimate authority, under a framework of reasonable guarantees and with a view to a peace that does not renounce democracy.

COMPREHENSIVE ECONOMIC RECOVERY PROGRAM

Historical experience shows that, after conflicts or deep collapses, the most stable transition processes have combined political change with robust economic programs. Venezuela will be no exception.

Without a credible economic horizon, any political effort risks collapsing. A population that has endured years of hyperinflation, wage erosion, breakdown of basic services, and massive migration cannot be sustained on symbols or promises alone. That is why the objective scenario requires a comprehensive recovery program, backed by a broad coalition of international and regional actors, with at least three pillars:

1. A stabilization and reconstruction fund, aimed at:
 - Gradually restoring price stability and the basic functioning of the financial system;
 - Rehabilitating critical infrastructure (electricity, water, transport, health, education);
 - Supporting minimum social protection networks while the economy begins to reactivate.
2. The strategic use of Venezuelan talent inside and outside the country, through:
 - Clear and gradual incentives for the return of those who wish to come back;
 - Mechanisms that facilitate productive investment by the diaspora and channel remittances into local development projects;
 - Exchange and knowledge transfer programs linking Venezuelan professionals abroad with universities, companies, and public agencies undergoing reconstruction.
3. An economic partnership conditioned on democratic results, in which:
 - Financial and technical cooperation is understood as a strategic partnership, not as a blank check;
 - Disbursements and support are tied to verifiable progress on fundamental freedoms, institutional strengthening, transparency, and anti-corruption efforts;
 - The weight of illicit economies associated with the previous model (drug trafficking, smuggling, illegal resource extraction networks) is steadily reduced.

The underlying message is simple: democratic victory must translate into concrete improvements in people’s lives. Without this economic component, the new political cycle risks becoming a brief interlude between two crises, fueling frustration and opening the door to new forms of authoritarianism, with a different discourse but the same logics of state capture.

MILITARY REFORM, THRESHOLDS, AND MAXIMUM ESCALATION

The current National Armed Force has been the backbone of the regime in power: it

merged external defense, internal control, economic participation, and political loyalty. The reform of the defense sector will therefore be a decisive component of any political change and crisis-exit scenario.

Some minimum strategic lines would be:

- **Depoliticizing the uniform**, effectively banning partisan proselytism in barracks and orienting military education toward national defense, the Constitution, human rights, and international humanitarian law.
- **Restructuring commands and units**, adjusting the size and functions of the military structure to the real needs of security and defense, deactivating units created for tasks unrelated to their mission, and returning to reformed police forces under civilian control the primary responsibility for public order.
- **Investigating and sanctioning serious human rights violations and significant cases of corruption**, while protecting and professionalizing personnel who have not committed crimes, and offering them a career in a democratic framework.
- **Building a new relationship with society**, based on transparency in budgeting and procurement, and on a visible role in disaster relief, infrastructure, and scientific missions that strengthens public trust.

The objective scenario will only be sustainable if the armed forces come to see themselves as an institution of the Republic, not as the praetorian guard of a political project.

No responsible analysis, however, can ignore the most uncomfortable hypothesis: what if political, diplomatic, and economic pressure fails, and the de facto power chooses to entrench itself, stepping up repression and raising the risk of regional spillover?

At that point, the inter-American system would be approaching the brink of open war. If the option of using force were to enter the discussion, it should do so under very strict conditions: demonstrable exhaustion of all peaceful avenues; clear legal and political basis, with broad hemispheric consensus; objectives limited in time and scope; rules of engagement designed to minimize harm to the civilian population; and an exit plan defined from day one.

Among the limit hypotheses, one of the most sensitive is the possibility of high-impact

symbolic attacks against strategic U.S. assets or critical infrastructure using aerial or unmanned means. From the logic of radical factions, a successful or partially successful strike on a high-value target could be seen as a psychological victory, even if the subsequent military cost were devastating.

For this reason, the objective scenario must consider three simultaneous lines of action:

1. Strengthening deterrence, with clear and firm communications about the consequences of any such attack.
2. Responsible preparation of the population in sensitive areas, explaining civil protection protocols in a calm and technical manner.
3. Maintaining discreet de-escalation channels that offer less catastrophic alternatives to those who might be tempted to cross that line.

The mission is not to feed fear, but to prevent a suicidal calculation from turning a serious crisis into a hemispheric tragedy.

TECHNOLOGICAL WARFARE: CYBERATTACKS, DRONES, AND HEMISPHERIC PREVENTION

The war in Ukraine has shown that, in contemporary conflicts, the technological dimension can alter the balance of power in a matter of weeks. Coordinated cyberattacks against critical infrastructure, massive disinformation campaigns, and the use of swarms of drones—for reconnaissance, attack, and loitering—have become central components of the battlefield.

In a potential Caribbean crisis scenario, Venezuela and its extra-hemispheric allies might be tempted to reproduce similar patterns: cyberattacks against power grids, banking systems, telecommunications, and government platforms in neighboring countries and the United States; use of adapted commercial drones or longer-range unmanned systems to harass military bases, ports, airports, refineries, or logistics hubs; and information operations aimed at sowing confusion, dividing democratic societies, and eroding trust in institutions.

The desired scenario should assume that the first line of confrontation may be invisible and silent, and that the hemispheric response has to anticipate the crisis. Some minimum strategic lines would be:

- Joint cyber-shielding, through the creation or strengthening of regional incident response centers, shared early-warning protocols, and regular collective cyberdefense exercises focused on critical infrastructure.
- Layered counter-drone defense, with phased deployment of sensors, jammers, kinetic means, and electronic warfare capabilities to protect strategic nodes, prioritizing interoperability among armed forces and civilian agencies.
- Control and traceability of sensitive technologies, with tighter regulation and oversight of the export, re-export, and dual use of components that may be employed in unmanned systems or offensive cyber capabilities.
- Digital literacy and informational resilience, through civic education programs and training for political leaders, media, and citizens to identify disinformation campaigns, malicious use of AI (deepfakes), and other hostile psychological operations.

In this realm, the silent victory lies in neutralizing technological damage potential before it translates into human casualties or social chaos, consolidating a hemispheric space where the costs of cyber and drone warfare are prohibitively high for those who would use them as tools of strategic blackmail.

ENERGY UNDER FIRE AND VULNERABLE POPULATIONS

In the hemispheric arena, energy infrastructure—refineries, pipelines, thermal plants, fuel depots, offshore platforms—are tempting targets for any actor seeking to inflict rapid and visible damage. But an attack on these facilities not only paralyzes the economy: it can unleash large-scale environmental disasters with long-lasting effects on public health.

Explosions at refineries or storage tanks, pipeline ruptures, and widespread fires can release toxic clouds into the atmosphere, generate acid rain, contaminate rivers, aquifers, and agricultural soils, and destroy coastal and marine ecosystems. In human terms, this translates into acute respiratory crises, increased chronic disease, internal displacement, and loss of livelihoods for entire communities.

The objective scenario must explicitly incorporate this expression of power, with at least four implications:

1. Environmental thresholds for the use of force, so that any discussion of military operations—whether domestic, coalition-based, or in a collective security framework—includes the obligation to minimize the risk of massive environmental destruction and avoid scenarios of “strategic ecocide.”
2. Preparedness for technological emergencies, with specific civil protection plans for large-scale contamination scenarios, evacuation routes, specialized medical care centers, and atmospheric and water monitoring systems.
3. Hemispheric environmental response mechanisms, including multinational task forces for spill containment, industrial fire control, and disaster response related to attacks on energy infrastructure.
4. Environmental justice, incorporating environmental and health reparations for affected communities, recognizing that the legitimacy of the new order will also depend on its ability to restore damaged territories and lives.

In a world where energy remains the backbone of the economy, turning energy zones into military targets means placing the population itself in the crosshairs. The true silent victory is not only to avoid open war, but to prevent the logic of conflict from slowly and irreversibly destroying the environmental conditions that make a dignified life possible for millions of people in the hemisphere.

CONCLUSIONS

The way in which the Venezuelan crisis is resolved will largely define the kind of political order the hemisphere is willing to accept. Venezuela has become an uncomfortable mirror: either the capture of the state and electoral manipulation as a method for indefinite retention of power are normalized, or it is demonstrated—through concrete actions—that popular will remains the central criterion of legitimacy in the inter-American system.

From the perspective of the *Reloj del Conflicto 5D* by Osmov, the objective scenario for Venezuela integrates six dimensions that cannot be addressed in isolation:

1. **The core problem is no longer “who won the elections,” but how to make a blocked democratic victory effective in a captured institutional environment.**

The objective scenario proposes recognizing the legitimacy already obtained, ensuring —through political, legal, and diplomatic means— that the president-elect effectively assumes office, and anchoring all of this in a democratic collective security architecture where the OAS, the IADB, the TIAR, and subregional mechanisms act as guarantors, not mere spectators.

2. **Any political change that ignores the fate of militias, colectivos, and the hard core of the ruling project will be sowing the seeds of the next wave of violence.** The challenge is to offer inclusion without impunity: demobilization and reconversion paths for the majority, criminal or transitional justice for those responsible for serious violations, and territorial reconciliation mechanisms to prevent retaliation and the reopening of old wounds.
3. **Without a credible economic horizon, the new democratic cycle will be fragile.** The ideal scenario requires a comprehensive recovery program, with a stabilization and reconstruction fund, the strategic use of Venezuelan talent inside and outside the country, and an economic partnership conditioned on democratic results. Hope must turn into tangible improvements in income, services, and opportunities; otherwise, the risk of a return to authoritarianism —under a new name and narrative— will remain permanent.
4. **The National Armed Force cannot continue to function as the praetorian guard of a political project.** The sustainability of the objective scenario depends on a profound reform of the defense sector: depoliticizing the uniform, adjusting structure and missions, separating external defense from internal order, and purging —with justice, not vengeance— those who betrayed their constitutional oath. At the same time, the region must keep the edge hypothesis of the use of force and possible maximum escalation visible, not to hasten it, but to understand that inaction also carries strategic and human costs.
5. **The first line of conflict in the future may be cyber, not kinetic.** Cyberattacks, drones, and information operations can destabilize states without firing a single round. The silent victory, in this dimension, consists in building a hemispheric shield: cooperative cyberdefense, layered counter-drone systems, control of sensitive

technologies, and informational resilience among societies and political elites.

6. **Attacking energy infrastructure not only paralyzes economies: it can trigger long-term environmental disasters, with direct effects on the health and survival of entire communities.** The objective scenario incorporates environmental thresholds for the use of force, preparedness for technological emergencies, joint environmental response mechanisms, and environmental justice commitments for those already affected by the collapse of the current model.

The silent victory in Venezuela will not consist solely in avoiding war. It will consist in proving that an intelligent combination of political, diplomatic, economic, technological, and military pressure —guided by democratic legality, the protection of the population, and a long-term strategic vision— can still correct an authoritarian drift without sacrificing an entire generation on the altar of conflict.

If the hemisphere is able to support this objective scenario with coherence and determination, the *Reloj del Conflicto 5D* by Osmov will mark for Venezuela the transition from the War quadrant to that of reorganization, reconstruction, and reconciliation —not as a fragile truce, but as the beginning of a dignified, democratic, and sustainable peace for its people and for hemispheric security as a whole.

About the author

Miguel Oswaldo Moreno Valverde (Osmov)

Brigadier General (ret.) of the Ecuadorian Army, practicing attorney, strategic analyst, and academic consultant. He has held high-level positions in the military sphere and in the security of the energy sector, with experience in strategic planning, crisis management, and hemispheric cooperation in security and defense. He is currently President of the Association of Former Advisors and Graduates of the Inter-American Defense College, Ecuador Chapter (ASOCID-ECUADOR).

He is the creator of the five-dimensional, AI-assisted decision-making model known as the “*Reloj del Conflicto 5D* by Osmov”, which is currently in a testing and evaluation phase.

osmov@asocid-ecuador.com